

ECONOMÍA PARA LA DEMOCRACIA

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INCLUSIVO Y TERRITORIAL EN HONDURAS



Noviembre 2025

BRECHAS QUE DEBILITAN LA DEMOCRACIA

La democracia hondureña se enfrenta a un problema estructural: la incapacidad del modelo económico para generar bienestar de manera amplia y equitativa. La concentración del crecimiento en pocos sectores y regiones ha dejado amplias zonas del país con servicios públicos insuficientes, baja diversificación productiva y escasas oportunidades laborales.

© FOSDEH

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino, Casa 1011, Tegucigalpa, Honduras.

Tel/Fax: (504) 2239-3404 | (504) 2239-2110

Correo electrónico: contacto@fosdeh.net

Sitio web oficial: www.fosdeh.hn Facebook- Instagram: @fosdeh - Twitter: @fosdeh -

YouTube: Fosdeh

Coordinación General

Mauricio Díaz Burdett

Autores

Emma Velásquez.

Dina Bonilla

Evin Pagoaga.

Fernando Hernández

Isma Mariely Romero

Helen Yisel Turcios Padilla

Guillermy Dariela Crescencio

Paula Karina Müller Gómez

Jeydi Yajaira Trochez Euceda

Guillermy Dariela Crescencio

José Félix Cobán Franco

Suna Emilia Chávez Wood

Darwin Pineda Pereira

Christian Jair Mejia Suazo.

Claudia Fortin

Imer Maldonado

Diagramación

Joel Aleman



Contexto

El fortalecimiento democrático en Honduras depende cada vez más de la capacidad del país para generar desarrollo económico inclusivo, crear empleos dignos y reducir las desigualdades territoriales que limitan las oportunidades de amplios sectores de la población. La democracia no se sostiene únicamente en sus instituciones electorales, sino también en su habilidad para mejorar las condiciones de vida, ampliar las oportunidades de movilidad social y garantizar que las políticas públicas respondan con eficacia a las demandas ciudadanas y productivas.

El modelo económico hondureño ha privilegiado históricamente la concentración del crecimiento, beneficiando a sectores específicos mientras amplias regiones quedan atrapadas en ciclos de pobreza, baja productividad y dependencia.



Esta dinámica se refleja en la afirmación de que “un modelo económico centrado en exoneraciones fiscales, privilegios para grandes capitales y una creciente desregulación del mercado laboral ha debilitado la base tributaria y reducido la capacidad del Estado para generar ingresos sostenibles.”, reduciendo los recursos disponibles para inversión social, infraestructura productiva y desarrollo local. En los territorios, estas desigualdades se expresan en servicios básicos escasos, limitadas oportunidades de empleo y expansión de prácticas informales o ilícitas que debilitan la gobernabilidad democrática.

Mientras tanto, comunidades en todo el país esperan que los candidatos sean capaces de impulsar oportunidades económicas reales y sostenibles. La población señala que, cuando faltan los recursos esenciales y se degrada el entorno, también se deterioran las posibilidades de desarrollo y bienestar.



La ciudadanía insiste en que el crecimiento económico no puede seguir llegando de manera distante o desconectada de sus necesidades, sino mediante inversión productiva y ecológica, acceso a servicios fundamentales y políticas que fortalezcan la economía local. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) analiza cómo el desarrollo económico inclusivo y territorial es condición esencial para fortalecer la democracia hondureña. Examina las tensiones estructurales que afectan la productividad, el empleo y la inversión regional; sintetiza la evidencia económica y territorial disponible; e identifica recomendaciones viables para promover un modelo de crecimiento con equidad, transparencia y sostenibilidad democrática.

La democracia hondureña se enfrenta a un problema estructural: la incapacidad del modelo económico para generar bienestar de manera amplia y equitativa. La concentración del crecimiento en pocos sectores y regiones ha dejado amplias zonas del país con servicios públicos insuficientes, baja diversificación productiva y escasas oportunidades laborales. Estas brechas territoriales no solo afectan el desarrollo económico, sino que también erosionan directamente la confianza ciudadana. Más del 70% de la población expresa insatisfacción con el funcionamiento de la democracia (Latinobarómetro, 2023), una señal clara de que las instituciones no están respondiendo a las expectativas sociales ni económicas de la ciudadanía. La desconexión entre las políticas nacionales y las necesidades territoriales se traduce en desconfianza, desinformación y polarización, especialmente en contextos de precariedad económica.

El problema no es solo económico ni solo político: es un círculo vicioso donde desigualdad, debilidad institucional, violencia y migración se refuerzan mutuamente. Este círculo se expresa con claridad en el hecho de que la precariedad laboral y la falta de oportunidades empujan a jóvenes y familias enteras a migrar. La migración se ha convertido en una estrategia de sobrevivencia más que en una opción de movilidad, reforzando la dependencia de remesas y debilitando las capacidades locales de desarrollo.

Además, los territorios más alejados del poder político enfrentan un abandono histórico que se refleja en servicios públicos deficientes, limitada inversión productiva, conflictos socioambientales y escasa presencia institucional. En estas zonas, la débil infraestructura económica, la falta de diversificación productiva y la ausencia de políticas sostenidas de desarrollo territorial impiden consolidar economías locales dinámicas. Sin abordar estas desigualdades, la democracia hondureña seguirá siendo frágil.

Antecedentes

La economía hondureña está marcada por profundas asimetrías territoriales, desigualdades de acceso a servicios productivos y una débil articulación entre políticas nacionales y dinámicas locales. Estas tensiones tienen varias dimensiones interrelacionadas.

Por un lado, la estructura económica nacional se sustenta en sectores con poco valor agregado, una fuerte dependencia de importaciones y baja capacidad de absorción de mano de obra calificada. La informalidad alcanza más del 74% de la población ocupada (INE, 2024), lo que limita la productividad y reduce la base contributiva del aparato estatal. La falta de diversificación productiva impide crear empleos formales y dignos, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Asimismo, la desigual distribución de la infraestructura económica profundiza las brechas territoriales. La limitada inversión en caminos rurales, sistemas de riego, electrificación, conectividad digital e infraestructura educativa y de salud reduce la competitividad y eleva los costos de producción.

La población percibe que, aunque los partidos políticos prometen cambios durante la campaña, estos compromisos no se traducen en obras, proyectos ni políticas que realmente transformen la economía local.



A esto se suma que las regiones del interior y del litoral caribeño enfrentan la expansión de economías ilícitas y redes criminales que se aprovechan de la ausencia institucional. Esta ausencia estatal abre espacio a actividades ilícitas y prácticas clientelares que refuerzan la impunidad y la desconfianza ciudadana. La fragilidad institucional no solo afecta la seguridad, sino que también limita la actividad económica formal y desalienta la inversión privada. La degradación ambiental y los conflictos por el uso del territorio también afectan directamente la economía local. La expansión de monocultivos, la tala ilegal, los proyectos extractivos sin consulta previa y la deforestación comprometen la sostenibilidad productiva. Además, la variabilidad climática (sequías prolongadas, inundaciones y huracanes) genera mayores riesgos para las MIPYMES rurales, que carecen de seguros, de infraestructura resiliente o de acceso a financiamiento para la recuperación. La falta de una gestión ambiental efectiva no solo es un problema ecológico. Las comunidades expresan que cada árbol caído recuerda lo que se ha olvidado a nivel estatal, mostrando cómo la degradación ambiental impacta la economía y la confianza pública.

Finalmente, el debilitamiento de los servicios de salud y educación limita el desarrollo del capital humano. La caída de la cobertura de vacunación, los conflictos laborales en el sector sanitario y el rezago educativo reducen la productividad y perpetúan la exclusión. Sin capital humano fuerte no hay economía fuerte, y sin economía fuerte no hay democracia sostenible.

■ La problemática

Desde una perspectiva económica requiere comprender cómo las desigualdades territoriales, la falta de inversión productiva y el deterioro institucional inhiben el dinamismo económico y amplían la brecha entre ciudadanía y Estado.

La estructura productiva hondureña opera bajo un patrón que reproduce y profundiza las desigualdades regionales. Mientras algunas zonas urbanas experimentan cierto dinamismo económico, gran parte del territorio permanece desconectado de oportunidades productivas. Esta brecha se refleja en limitaciones estructurales como la falta de crédito, la débil asistencia técnica, la escasa diversificación laboral y la inestabilidad climática, que afecta directamente la producción agrícola, principal sustento de muchas comunidades rurales. Además, el desempleo y subempleo juvenil constituyen una de las principales amenazas para la estabilidad económica y democrática. Existe una urgencia de políticas que integren a las juventudes en el tejido productivo mediante empleo digno, educación técnica y acceso a emprendimiento. La exclusión de jóvenes no solo limita el crecimiento económico: erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la cohesión social.

Las mujeres enfrentan obstáculos aún mayores para integrarse plenamente en la economía. Las brechas salariales, la violencia estructural y la falta de políticas de cuidado restringen su autonomía económica. Sin participación económica de las mujeres no existe modelo de desarrollo inclusivo posible.

Sin la participación efectiva de mujeres y jóvenes, el país pierde competitividad, creatividad y fuerza laboral esencial para consolidar un modelo de desarrollo incluyente. La violencia y la inseguridad, por otro lado, impactan directamente la actividad económica. La presencia de maras y pandillas, la extorsión y la violencia política reducen la inversión privada, inhiben el crecimiento empresarial e incrementan los costos operativos, especialmente en pequeñas y medianas empresas que son fundamentales para el desarrollo local.

Finalmente, la precariedad económica, la exclusión territorial y la corrupción se retroalimentan. La corrupción y la captura del Estado desvían recursos públicos y erosionan su capacidad de respuesta, debilitando la provisión de servicios esenciales y reduciendo la inversión productiva. Esta dinámica perpetúa la informalidad, la migración y la desconfianza.

Para romper este círculo, se requiere una estrategia integral que conecte desarrollo económico con fortalecimiento institucional, equidad territorial y participación ciudadana.



Opciones de Política

Existen diversas rutas para avanzar hacia un modelo económico que fortalezca la democracia. Una de ellas es la inversión productiva con enfoque territorial, orientada a cerrar brechas históricas en infraestructura, capital humano y acceso a servicios financieros. Esta estrategia permitiría impulsar cadenas de valor locales, mejorar la competitividad regional y dinamizar economías comunitarias que han permanecido marginadas.

Otra ruta es el fortalecimiento institucional en materia económica y territorial. La gestión pública en Honduras enfrenta serios desafíos de eficiencia, planificación y transparencia. La consolidación de sistemas de rendición de cuentas, la simplificación de trámites y la promoción de un clima de inversión transparente son elementos esenciales para atraer inversión formal, dinamizar mercados y garantizar que los beneficios se distribuyan de manera equitativa.

Una tercera opción es el impulso a programas de empleo digno que integren formación técnica, innovación productiva y mecanismos de inserción laboral, especialmente para jóvenes y mujeres. Sin acceso a empleo, la democracia no puede sostenerse sobre una base social sólida.

Finalmente, una ruta complementaria es la promoción de justicia ambiental y sostenibilidad productiva. La degradación ambiental compromete sectores clave como el turismo, la agricultura, la pesca y la seguridad hídrica. La defensa del ambiente no es únicamente un tema de derechos: es una condición económica para la viabilidad de los territorios.

Recomendaciones

El fortalecimiento democrático desde una perspectiva económica requiere políticas públicas que articulen inversión, equidad, institucionalidad y participación. El FOSDEH propone, de manera coherente y contextualizada, las siguientes recomendaciones:

Primero, promover un programa nacional de desarrollo económico territorial basado en inversión productiva, infraestructura estratégica y fortalecimiento de cadenas de valor locales. Este programa debe priorizar territorios históricamente excluidos, fortaleciendo su conectividad, acceso a energía, riego, asistencia técnica y crédito.

Segundo, consolidar un sistema de competitividad local que apoye a pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento accesible, capacitación, innovación y formalización empresarial. Las MIPYMES constituyen el 70% del empleo nacional y son clave para democratizar el crecimiento económico (AHIBA, 2025).

Tercero, impulsar una política nacional de empleo digno que integre formación técnica, certificación laboral, incentivos para contratación formal y mecanismos de inserción para jóvenes, mujeres y población retornada. La creación de oportunidades laborales es esencial para reducir la migración forzada y fortalecer la cohesión social.

Cuarto, fortalecer las instituciones económicas y territoriales mediante planificación de largo plazo, transparencia en la inversión pública, monitoreo ciudadano y mecanismos de rendición de cuentas. Reducir la captura institucional y los incentivos perversos permitirá mejorar la productividad del gasto y la eficacia de las políticas económicas.

Quinto, promover justicia ambiental y sostenibilidad productiva mediante gestión integral del agua, restauración de ecosistemas, regulación efectiva de actividades extractivas y fomento de prácticas agroecológicas. La estabilidad ambiental es un activo económico fundamental para el desarrollo local.

Sexto, mejorar la provisión de servicios públicos esenciales (salud, educación, infraestructura digital) como parte integral de la estrategia económica. La productividad nacional depende directamente del fortalecimiento del capital humano.

Séptimo, fomentar participación económica y política de mujeres y jóvenes mediante liderazgo local, acceso a crédito, programas de emprendimiento y medidas de corresponsabilidad de cuidados. Sin su participación, el desarrollo económico seguirá siendo desigual.

En Resumen...

El fortalecimiento democrático en Honduras depende de la construcción de un modelo económico más incluyente, equitativo y territorialmente balanceado. La evidencia muestra que la democracia no puede sostenerse sobre un sistema productivo que excluye a grandes sectores de la población y reproduce desigualdades históricas. En este contexto, transformar un modelo históricamente concentrado en otro basado en la inclusión y la corresponsabilidad constituye el desafío central para avanzar hacia un desarrollo que genere bienestar, oportunidades y confianza pública en todo el país.

Una democracia económica requiere generar oportunidades reales, distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento y garantizar que todos los territorios cuenten con condiciones para prosperar. Apostar por el desarrollo territorial, empleo digno, innovación y fortalecimiento institucional no solo mejorará la economía: también reconstruirá la confianza ciudadana, ampliará la base social del desarrollo y fortalecerá la gobernanza democrática a largo plazo.

